



Expte: 088/2025 (A/SER-049178/2024)

D^a. M. Lourdes Domínguez Cacho, Jefa de Servicio de Contratación, como Secretaria de la Mesa de Contratación de esta Consejería, respecto al Contrato de servicios denominado *“Oficina técnica para la planificación, evaluación y análisis de las políticas públicas de la Consejería 2025-2029”*

CERTIFICO

Que la Mesa de Contratación en su reunión del día 19 de septiembre de 2025, tras el estudio de la documentación remitida por IDEARA S.L. (B36931723), como subsanación a la que presentó como propuesto adjudicatario de este contrato ha decidido la exclusión de dicha entidad por los siguientes motivos:

- **En cuanto a la solvencia técnica y profesional:** De la documentación presentada en fase de subsanación, que incluye servicios nuevos a los ya presentados, se constata que en solo dos de ellos hay una correspondencia unívoca entre su código CPV y alguno de los códigos que figuran en el PCAP del contrato (79311300-0 Servicios de análisis de estudio y 79419000-4 Servicios de consultoría en evaluación). El apartado 7.2. de la cláusula 1 del PCAP establece como criterio de selección, *“los trabajos realizados en los tres últimos años de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, considerando los CPV del mismo”*.
- **En cuanto al compromiso de adscripción de medios:**
 - Respecto a la disponibilidad de la persona directora del centro, MZI, no presenta documentación probatoria, suficientemente justificada, de la experiencia exigida de 3 años en tareas de coordinación, planificación y gestión de los recursos humanos y técnicos como se requirió. En el certificado presentado, firmado por el Administrador de SARHE CONSULTORÍA, S.L., si bien se acredita que la persona indicada ha realizado dichas funciones a lo largo de los últimos 15 años, no se concreta exactamente el tiempo en que ha realizado las mismas, teniendo en cuenta que el certificado señala que durante esos 15 años ha realizado dichas funciones y también las de consultora, no consta expresamente, en que 3 años ha realizado tareas de coordinación, planificación y gestión de los recursos humanos y técnicos. Además, en la documentación presentada de esta trabajadora por IDEARA S.L relativa al cumplimiento de lo estipulado en Cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como propuesto adjudicatario, la misma entidad, SARHE CONSULTORÍA, S.L., solamente justificó tareas realizadas por MZI en calidad de consultora desde 2005.
 - Respecto a la disponibilidad de VHA, persona consultora, no presenta en relación con la subsanación requerida, documentación probatoria que acredite suficientemente los tres años de experiencia en análisis, definición, coordinación y supervisión de proyectos, tareas y actividades propias de la evaluación de políticas públicas y los seis años de experiencia en evaluación de políticas públicas, tres de los cuales, al menos, en evaluación de políticas sociales.
 - Sobre la disponibilidad de JMRI, persona consultora, existe discrepancia entre lo reflejado en el informe de vida laboral relativo al grupo de cotización del empleado (03, en lugar del 01 que correspondería a un consultor licenciado) y la declaración firmada por el representante legal de IDEARA, S.L., respecto a la relación laboral con la entidad como técnico de estudios y consultor de evaluación.



Contra el presente acto de trámite, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso especial en materia de contratación, en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, o ante los lugares establecidos en el artículo 16. 1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiéndolo comunicar, en este caso, al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, artículos 123 y 124 de la Ley de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, a fecha de firma

EL PRESIDENTE DE LA MESA
Vº. Bº.

Firmado digitalmente por: BENITO MARTÍNEZ ANTONIO
Fecha: 2025.09.25 17:23

Fdo. Antonio Benito Martínez

LA SECRETARIA DE LA MESA

Firmado digitalmente por: DOMÍNGUEZ CACHO M. LOURDES
Fecha: 2025.09.25 16:14

Fdo. M. Lourdes Domínguez Cacho